

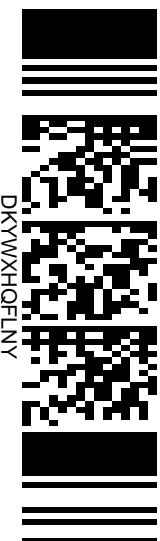
C.A. de Santiago

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.

Proveyendo a los folios N°29 y 30; A todo, téngase presente.

En los autos Rol C-27.366-2019, seguidos ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, por juicio ordinario, caratulado “Contreras con Fisco de Chile”, la parte demandada dedujo recurso de apelación, cuestionando que se hubieran desestimado sus defensas de reparación integral, prescripción y monto de las indemnizaciones.

La sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre de 2022, en lo resolutivo, procedió a rechazar la excepción de reparación integral alegada por la demandada, lo mismo respecto de la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos décimo a decimocuarto de esa sentencia; acogiendo la demanda interpuesta, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de una suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) a título de daño moral en favor del actor Julio César Contreras Leiva y la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), bajo el mismo título indemnizatorio en favor del actor Fernando Enrique Contreras Leiva. Dichas sumas, precisa, deberán pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo tercero de esa misma sentencia, determinando que cada parte deberá soportar sus costas.



Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

1°.- Que, el Fisco de Chile se alza en contra de la sentencia definitiva de primera instancia que desestimó las excepciones invocadas por su parte de haber sido ya reparados los perjuicios; haber operado en la especie la prescripción y, por el monto asignado en la sentencia por concepto de daño moral a los actores.

2°.- Que esta Corte comparte los argumentos de primera instancia para desestimar las excepciones opuestas.

En efecto, no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren los las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que sólo puede determinarse en un juicio en el que puedan ponderarse las situaciones particulares de cada caso, de manera que procedía desechar la excepción de reparación opuesta.

3°.- Que en cuanto a la excepción de prescripción, es un hecho pacífico que el derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad prohibiéndose por la Convención de Ginebra que las partes contratantes se exoneren a sí mismas de las responsabilidades incurridas a causa de tales hechos. Así tal



como ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos *“no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental....”*. (Roles 20.288-2014; 22.856-2016 entre otras).

La legislación civil nacional que consagra la institución de la prescripción está referida a ilícitos comunes y jamás pensada para casos tan graves como lo son las violaciones a los derechos humanos, cuyo establecimiento se logra después de cambios político-gubernamentales y que suelen durar muchísimas décadas como la experiencia nacional demuestra.

De esta manera, los preceptos legales que invoca el Fisco de Chile como fundamento de su solicitud no resultan atinentes al encontrarse en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que amparan el derecho de las víctimas a recibir la reparación correspondiente, motivo por el cual acierta el tribunal de primera instancia al desestimar la prescripción extintiva invocada como alegación principal y la prescripción extintiva ordinaria deducida en subsidio.



4°.- Que, en cuanto al monto dinerario que se reguló por indemnización por daño moral, para lo cual se adjuntaron las evidencias documentales a que aluden los motivos cuarto y quinto de la sentencia en alzada, que son los que permitieron acreditar como hechos, que los hermanos Julio Contreras Leiva hoy de 72 años de edad y Fernando Contreras Leiva de actuales 86 años de edad, fueron detenidos y maltratados en el sector Quilmenco-Chichiñi, cercano a la ciudad de Salamanca, por agentes policiales del Estado de Chile (Carabineros de Chile), además de padecer humillaciones, insultos, simulacros de fusilamiento y amenazas, esto a partir del día 5 y hasta el 10 de octubre de 1973, ello como consecuencia que el primero era dirigente del Partido Socialista (PS) y el segundo, simpatizante de la misma tienda política. El contingente policial estaba a cargo del capitán Gabriel Muñoz, cuyas consecuencias se tradujeron en sufrir ambos de síndrome de estrés post-traumático crónico.

Es dable, además, destacar que el demandado Fisco de Chile no controversió la calidad de víctimas de prisión política y apremios de ambos demandantes ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos, de manera que estando acreditada la calidad referida, acertadamente, la sentencia determinó que había que estarse a los hechos expresados en la demanda.



5°.- Que, en este escenario, al encontrarse acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y malos tratos de ambas víctimas, que no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, por lo que sólo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos.

6°.- Que, esos antecedentes acreditan su detención ilegal como arbitraria, como los apremios físicos y psicológicos infligidos a ambos demandantes, generando mayores consecuencias en Fernando Contreras Leiva, conforme se precisa en el motivo vigésimo primero, al perder su actividad ganadera que desarrollaba a la época, y secuelas psicológicas que le impidieron concretar un proyecto de vida personal así como sus problemas de socialización, antecedentes que, permitieron darle un monto mayor.

7°.- Que, esa experiencia, consistente en recibir malos tratos, sufrir incomunicación, interrogatorios y vejámenes como trato humillante, los que se encuentran refrendados por el Certificado Psicológico y Social de ambos, que concluyeron con que sus relatos son creíbles, vivieron una experiencia de represión política, traumática y les generó un estrés postraumático crónico lo que les afectó de manera notoria su vida y a uno de ellos, en mayor medida.

Lo constatado, importa, a juicio de esta Corte, afectaciones que acreditan la existencia de un daño moral, y



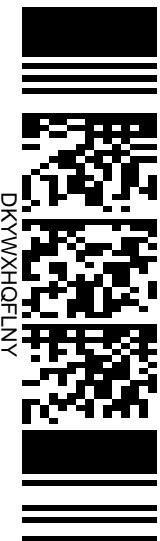
coincide con su evaluación efectuada en la sentencia de primer grado, atendidos los elementos demostrados en sus detenciones y afectaciones ocurridas en ese periodo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

Se **CONFIRMA** la sentencia apelada de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la causa Rol C-27366-2019, seguida ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, por juicio ordinario, caratulado “Contreras con Fisco de Chile”.

Se previene que la ministra (S) Sra. Villegas Pavlich estuvo por confirmar la sentencia en alzada rebajando el monto del daño moral concedido a los actores, por las siguientes razones:

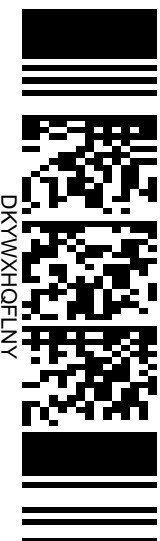
1°.- Que los daños no patrimoniales, deben ser acreditados, para lo cual se debe considerar, además, la prueba documental acompañada por los actores, en especial, la indicada en los motivos décimo noveno y vigésimo del fallo en alzada, la cual permite presumir en forma grave, precisa y concordante los daños padecidos por los actores, que no son solo físicos, sino, también, psicológicos, por lo que corresponde que sean compensados de forma adecuada y efectiva, ello para remediar las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos que sufrió, que si bien no son cuantificables de manera pecuniaria, si puede establecerse conforme a la lesión de bienes valiosos, como son la vida, la integridad física



y psíquica, la salud, el honor y sucede que, en este caso, se ha acreditado el menoscabo y sufrimientos que han experimentado los demandantes en tales intereses y que justifican en definitiva que deban ser indemnizados.

2°.- Que sin embargo, es necesario efectuar una ponderación del monto conferido a título de indemnización del daño moral, respecto de cada uno de los demandantes, en atención a las circunstancias objetivas de los hechos descritos en la demanda y su posterior acreditación, tales como la edad que tenían al momento de su detención, su condición de salud, daño acreditado, y el tiempo que padecieron en estas situaciones, situaciones particulares que se encuentran contenidas en el motivo décimo noveno, párrafos cuarto y quinto del fallo en alzada, sin que el monto fijado por el sentenciador atendiera adecuadamente cada caso en particular, de manera tal que quien previene estima que el monto concedido por daño moral, deberá regularse y rebajarse prudencialmente para satisfacer adecuadamente los males y secuelas que fueran suficientemente acreditados y que fueron producto de los actos directos e inmediatos de agentes del estado, derivados de su detención sufrida entre el 5 y 10 de octubre de 1973.

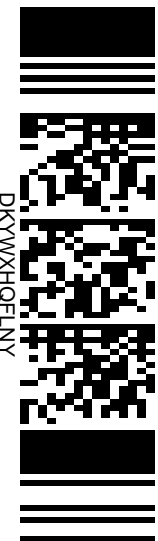
3°.- Que en consecuencia, quien previene era de la idea de reducir la indemnización de perjuicios por daño moral a los siguientes montos: a) \$15.000.000 para el demandante Julio



Contreras Leiva; y b) \$20.000.000 para el actor Fernando Contreras Leiva.

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase.

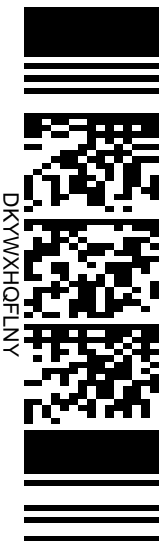
N°Civil-15321-2022.



Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, la Ministra (S) señora Erika Andrea Villegas Pavlich y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

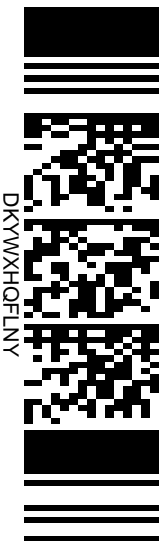
Autoriza el (la) ministro de fe de esta ltima. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministra Suplente Erika Andrea Villegas P. y Abogado Integrante Euclides Ortega D. Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>